

RESOLUCIÓN R-073-2017

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. RECTORIA. ALAJUELA A LAS DIEZ HORAS DEL 10 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO, INTERPUESTO POR KARLA VALVERDE VARELA.

RESULTANDO

De importancia para el conocimiento y resolución de este recurso:

PRIMERO: Que en fecha 29 de agosto de 2016 se interpone denuncia en contra de Karla Valverde Varela, funcionaria de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad, por parte de la ex funcionaria Ana Rosa Calvo Calvo, cédula de identidad 105990746, por supuestos actos de acoso laboral sucedidos durante el período de permanencia de la denunciante en la institución. Solicita se proceda a realizar la investigación respectiva y aportar la prueba documental.

SEGUNDO: Que de conformidad con las potestades conferidas a la Rectoría de la Universidad Técnica Nacional, mediante el Estatuto Orgánico, en el numeral 22 inciso g, se resuelve ordenar la instauración de un Procedimiento Disciplinario.

TERCERO: Que en fecha ocho de diciembre de 2016 se trasladan los cargos y se fija fecha de comparecencia.

CUARTO: Que el nueve de diciembre de 2016, la funcionaria Karla Valverde Varela, interpone recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra de la resolución en donde se trasladan los cargos.

CONSIDERANDO
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

PRIMERO: Que los alegatos esgrimidos por la recurrente, un total de veinticuatro versan sobre aspectos de fondo, es decir contradicen de manera puntual y específica como suerte de réplica a los supuestos hechos planteados mediante la denuncia de acoso laboral, que fue trasladada a la funcionaria Valverde Varela, para su conocimiento y ejercicio de derechos según los intereses de la recurrente.

Resulta inadmisibile el uso del instituto procesal de los recursos ordinarios con el propósito de obviar el procedimiento administrativo y resolver mediante la apelación el asunto objeto de controversia. Tómesese en especial consideración que la naturaleza del procedimiento administrativo de marras es de carácter ordinario, en donde según lo ha señalado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, el mismo tiene una naturaleza contradictoria y disímil, y en el que existen las etapas procesales oportunas que permiten un adecuado ejercicio del derecho de defensa:

“La sanción que corresponda no podrá imponérsele sin formación previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia” (Sala Constitucional, Resolución 5633-1993 de las 08.27 horas del 5 de noviembre de 1993).

Bajo el principio constitucional del debido proceso contenido en los numerales 39 y 41 de la Carta Magna, la recurrente tendrá en la audiencia la posibilidad de hacer uso de un compendio de amplias garantías para refutar los argumentos plasmados en la denuncia.

El objetivo fundamental del procedimiento seguido en contra de la funcionaria Valverde Varela es la búsqueda de la verdad real, misma que sólo podrá salir a la luz, bajo la confrontación de las partes, así como lo que conste en los documentos y otras pruebas que sean aportadas.

“Como es bien conocido dentro de la literatura jurídica más autorizada, la regla general de esta materia es que toda persona tiene absoluto derecho a defenderse con amplitud en cualquier proceso que inicie la administración y que pueda afectarle sus derechos e intereses. El derecho al debido proceso comprende, como primer elemento, el conocimiento de las actuaciones en forma amplia y sin restricciones. Es en si una obligación constitucional y legal de la administración, el otorgar la posibilidad de que la persona a quien se le imputa un hecho pueda defenderse en sede administrativa”. (Dictamen N° C-132-89 del 27 de julio de 1989).

El derecho a la audiencia a la que aluden los artículos 218 y 309 de la Ley General de Administración Pública, tiene como finalidad la evacuación de pruebas, y realizar las alegaciones de hecho y de derecho que se consideren oportunas.

"La citada audiencia da al interesado la posibilidad de aportar al expediente su versión de los hechos que como elemento de juicio más, resulta en todo caso indispensable para que la autoridad decidente resuelva conociendo los datos o argumentos que legalmente pueda aportar el administrado con la finalidad de contrarrestar una prueba o posición prima facie o presuntivamente se manifiesta para el de forma adversa". (González Perez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Madrida, Editorial Civitas, S.A, pp. 176-177).

4

Los recursos ordinarios a los que la recurrente tiene derecho, no son medio para promover la defensa, sino ante violaciones de debido proceso, sea por omisión de éste o porque existieron errores en el mismo, tanto en la fase de instrucción, como en la emisión del acto final, la parte cuenta con la posibilidad de interponer dichos recursos para que la administración pueda revisar lo actuado, en específico el acto que inicia, el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación, toda vez que los hechos alegados en el mismo deberán ser ventilados en el curso del procedimiento administrativo ordinario de marras, según los numerales 39 y 41 de la Constitución Política, 22 inciso b del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Nacional, artículos 11, 214.2, 218, 221, 308, 309, 319, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, de la Ley General de Administración Pública.

NOTIFÍQUESE.

5



LIC. MARCELO PRIETO JIMÉNEZ

RECTOR



Dirección Asuntos Jurídicos



10 JUL 2017 PM4:37